

Pronunciamiento ante la situación de violencia e inseguridad en el norte de Nayarit

Las comunidades del norte del estado de Nayarit atraviesan una crisis humanitaria alarmante. La violencia armada, el desplazamiento forzado y la presencia constante del crimen organizado han puesto en riesgo la vida, la integridad y los derechos de cientos de personas en los municipios de Huajicori, Tecuala y Acaponeta. Ante esta situación, las autoridades estatales y municipales han actuado con omisión, indiferencia y, en algunos casos, con una actitud de abierta negligencia.

Desde mediados de 2024 se han documentado enfrentamientos entre grupos del crimen organizado que operan en la región colindante con Sinaloa y Durango. Estos hechos han provocado asesinatos, desapariciones, desplazamientos forzados y el control territorial de diversas comunidades por parte de grupos armados.

Casos como el de Santa María de Picachos, San Andrés Milpillas y El Riíto, donde familias han tenido que abandonar sus hogares en busca de seguridad, son muestra clara del abandono del Estado. Tan sólo en octubre se contabilizó el desplazamiento de al menos 57 familias, muchas de las cuales ya se encontraban en situación de refugio desde julio.

La violencia no ha cesado. La población vive bajo constantes amenazas, disparos al aire, asesinatos, ataques armados e impunidad. El hallazgo de un cuerpo desmembrado frente a una secundaria, el asesinato de Isabel Castañeda, y el ataque armado al palacio municipal de Huajicori son solo algunos ejemplos del nivel de violencia que enfrentan día a día estas comunidades.

El caso más reciente, ocurrido el 7 de julio en el poblado de Mineral de Cucharas, donde padre e hijo fueron asesinados dentro de su hogar, ha puesto nuevamente en evidencia la falta de respuesta estatal. Hasta más de 32 horas después, las autoridades no habían acudido al lugar para realizar el levantamiento de los cuerpos, mientras los familiares denuncian que la violencia impide el ingreso y que la versión oficial que responsabiliza a las condiciones del río no corresponde a la realidad.

Frente a estos hechos, **exigimos a las autoridades competentes:**

- La atención inmediata a las comunidades afectadas, con medidas de protección reales y sostenidas.
- El reconocimiento público de la situación de violencia y desplazamiento forzado en la región, así como un plan integral para su atención.
- La garantía de un retorno seguro, voluntario y digno para las personas desplazadas.
- Investigaciones serias, imparciales y con debida diligencia sobre los crímenes cometidos, y sanción a los responsables.
- La presencia del Estado no sólo en forma de seguridad armada, sino mediante políticas sociales, de salud, educación y justicia.